



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, marzo 16 de 2023

Radicado: 05001 31 05-001-2017-00172
Ejecutantes: MARÍA MAGDALENA DURANGO DAVID, BRAYAN
CADAVID DURANGO Y CAROLINA DAVID DURANGO
Ejecutados: PÓRTICOS INGENIEROS CIVILES SA JULIO ARTURO
GÓMEZ ROLDÁN E INMOBILIARIA PROACTIVA S.A.

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia que desata el recurso de apelación dentro del trámite ejecutivo laboral.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Los accionantes acuden al trámite ejecutivo pretendiendo la satisfacción de las condenas emitidas en el proceso ordinario laboral de radicado 05001-31-05-001-2008-00922 donde se estableció el deber de la sociedad Pórticos ingenieros Civiles SA, Julio Arturo Gómez Roldán y la inmobiliaria Proactiva SA a reconocer los perjuicios morales y materiales, además de las costas procesales.

Fue librado mandamiento de pago con auto del 15 de septiembre de 2017 (pág 6/9- archivo N° 2), como medida cautelar se decretó el embargo de recursos de cuentas bancarias (pág 12 – archivo N° 2) , se notificó a la pasiva (pág 58, 60, 80) se dio paso a la suspensión del trámite a efectos de verificar el cumplimiento de una transacción entre las partes, reanudando el mismo a partir del 1° de febrero de 2019 (pág 101) y sin que las accionadas hubieran presentado excepciones se siguió adelante con la ejecución, gravando en costas a la pasiva (pág 102/105) y se declaró la desvinculación de la sociedad pórticos Ingenieros Civiles SAS dado el proceso de liquidación judicial que dio lugar a la remisión al intendente Regional de la Supersociedades, siendo esta la última actuación realizada en el trámite que data del 15 de julio de 2019 (pág 155/157).

En providencia del 26 de enero de 2022 el despacho de origen declaró el desistimiento tácito de la acción ya que pasados más de 2 años desde la última actuación las partes no habían realizado gestión alguna para su continuidad, destacando que no existía trámite pendiente que estuviera a cargo del despacho. Además, argumentó la falladora que el presupuesto del artículo 30 del CPTSS “solo se da en el trámite de la notificación” así las cosas, dispuso la terminación del proceso ejecutivo, con el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del expediente.

Decisión recurrida por la parte ejecutante exponiendo que dentro de la jurisdicción ordinaria laboral no aplica la figura del desistimiento tácito, en su lugar se aplica la contumacia cuyo efecto es el archivo temporal del proceso, el que concluye una vez se materialice un impulso procesal. Adosó a su recurso la liquidación del crédito (archivo N° 5)

ALEGATOS

Concedido el término de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 sin que las partes presentaran escrito alguno.

CONSIDERACIONES

Para resolver la controversia planteada, resulta indispensable acudir al artículo 30 del C.P.T y de la S.S, modificado por el artículo 178 de la Ley 712 de 2001 que establece:

“ARTICULO 30. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTUMACIA. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001. Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación.

Si el demandante o su representante no concurrieren a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia.

Si no compareciere ninguna de las partes se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77.

Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de trámite.

PARÁGRAFO. Si transcurridos seis (6) meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente”

Sobre el propósito de la mencionada norma se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C- 868 de 2010, indicando que la inactividad de las partes no impide el normal desarrollo de proceso, dadas las amplias facultades del juez como director del proceso, ya que una vez instaurada la acción, el proceso no se paraliza por la inasistencia de las partes, sino que debe culminar. Así lo indicó la Corte Constitucional:

“Como se puede apreciar no existe una única herramienta para garantizar la efectividad de la administración de justicia. Es más, éstas deben diseñarse en función de garantizar de la mejor manera los derechos amenazados o vulnerados. En el caso del proceso laboral, si bien al juez no le es permitido el inicio oficioso de los procesos porque cada uno de ellos requiere de un

acto de parte, (la presentación de la demanda), una vez instaurada, el juez debe tramitar el proceso hasta su culminación, y si una de las partes o ambas dejan de asistir a las audiencias, no por ello se paraliza el proceso, pues el juez debe adelantar su trámite hasta fallar. En tal proceso, el legislador optó por dotar al juez de amplísimos poderes como director del mismo y complementariamente estatuir la figura de la contumacia con un triple efecto: (i) evitar la paralización del proceso en unos casos, (ii) proceder al archivo del proceso en otros, (iii) continuar con el trámite de la demanda principal; y (iv) asegurar que la protección de los derechos de los trabajadores no se postergue indefinidamente por la falta de actuación del empleador demandado. Y esto es así porque el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.[24] La jurisprudencia constitucional ha reconocido al legislador libertad para regular aspectos como los siguientes”

Indicó la Corte que a diferencia de la figura del desistimiento tácito consagrada en el artículo 346 del C.P.C, la legislación laboral contempla una situación garantista para el trabajador, ello en razón de los derechos en discusión con los que se satisfacen mínimos fundamentales. Resaltó la alta Corporación que la contumacia en la legislación laboral no es un método de terminación del proceso, sino un impulso oficioso del mismo, así indicó la corte:

“Observa la Corte en todo caso que la figura de la contumacia resulta más garantista de las finalidades de protección de los derechos de los trabajadores que tiene el proceso laboral, específicamente de otorgar mayores garantías a la parte débil del proceso, el trabajador. En efecto, en el desistimiento tácito cumplidas las condiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para sancionar a la parte inactiva, la consecuencia es la terminación del proceso, mientras que la figura de la contumacia, teniendo en cuenta las causales por las cuales procede, tiene como consecuencia el otorgamiento de mayores poderes al juez para impulsar el proceso laboral y garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores”

Se aclara que pese a la que la jurisprudencia referenciada alude al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las mismas son aplicables al caso concreto en tanto las premisas legales de tal norma fueron reproducidas en el artículo 317 del vigente CGP.

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la CSJ explicó que el principio de contumacia genera la posibilidad de adelantar el trámite procesal aún sin la comparecencia de las partes, ello cuando las partes se encuentren debidamente integradas al proceso, al respecto la providencia SL 15381 de 2016 indicó:

“El artículo 30 del CPT y de la SS., modificado por el 17 de la Ley 712 de 2001 contempla lo que se ha denominado principio de contumacia, que no es otra cosa que continuar adelante con el trámite procesal una vez que el demandado fue notificado personalmente de la acción y no la respondió.

Con las anteriores premisas, para la sala son acertadas las apreciaciones del recurrente, pues si bien tras varios años de inactividad no se ha avanzado en la etapa de liquidación del crédito, la consecuencia no era la terminación del proceso, y cancelación del registro en el sistema de gestión judicial, sino su archivo, el que en todo caso tiene efectos transitorios, pudiéndose reactivar una vez se satisfaga la actuación que se halle pendiente.

En adición debe tenerse presente que la acción omisa pudo haber sido suplida por el despacho tal como lo enseña el artículo 446 del CGP que explica que, luego de resueltas las excepciones, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito, expresión que revela que esta actuación es potestativa y que en todo caso es necesaria la aprobación del despacho, por tanto, bien pudo haberse realizado la liquidación por el despacho.

Además, contrario a lo explicado por el juzgado de origen en providencia del 26 de enero de 2022, el artículo 30 del CPTSS no solo tiene aplicación para el trámite de la notificación, toda vez que la norma aludida presenta un espectro de consecuencias frente al ausencia de las partes luego de generada la notificación a la pasiva, condiciones estas encaminadas a que el trámite no se paralice.

En suma, pese a que la partes han desatendido el trámite, debe tenerse presente que dentro del esquema procesal laboral no se consagra el desistimiento tácito del proceso, por cuanto el principio de contumacia comporta la facultad del fallador para adelantar el trámite aún sin la comparecencia de las partes; forzoso es concluir que la consecuencia de la inactividad de las partes llevaba ora a la elaboración oficiosa de la liquidación del crédito, ora al archivo temporal del proceso ejecutivo, no así su terminación.

Así las cosas, será revocada la decisión del fallador de instancia, y toda vez que la activa presentó la liquidación del crédito, se dispone dar continuidad al mismo trámite.

Resta por indicar que no se generan costas en esta instancia.

Por lo expuesto, **LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, REVOCA** la providencia de enero 26 de 2022 en su lugar dispone la continuidad del trámite. Sin costas en esta instancia.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

Sin firma por ausencia justificada
ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 28 de marzo de 2023